

**REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
JUZGADO SEGUNDO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA
MÚLTIPLE DE POPAYÁN**

SENTENCIA

Popayán, treinta y uno (31) de mayo dos mil veintidós (2022)

I. ASUNTO

No existiendo hechos que configuren causales de nulidad y habiéndose tramitado todas las etapas propias de esta clase de procesos, corresponde a la Judicatura dictar sentencia dentro del Proceso verbal sumario de declaración de responsabilidad civil extracontractual instaurado por **MARVIN FERNANDO ALVAREZ HERNANDEZ** en contra de **CARMEN HELENA RODRIGUEZ BASTIDAS** y **GLADIS AMPARO BASTIDAS LOPEZ**, por encontrarse reunidos los presupuestos procesales para el efecto.

Síntesis de la demanda:

1.- El señor FERNANDO AURELIO ALVAREZ CAJIAO y DIDIER ORLANDO ALVAREZ HERNANDEZ (padre y hermano de mi poderdante), el día 09 de Diciembre de 2015 interpusieron Demanda Ejecutiva Singular en contra de las señoras CARMEN HELENA RODRIGUEZ BASTIDAS y GLADIS AMPARO BASTIDAS LOPEZ, dicho proceso le correspondió al Juzgado Sexto Civil Municipal de Popayán. Radicado No. 2015-00750-00.

2.- En dicho proceso se perseguía el pago de más de TRES MILLONES (\$3.000.000,00), incluidas las costas procesales. Asunto en el cual se solicitó con la presentación de la demanda el embargo del salario de la señora CARMEN HELENA RODRIGUEZ BASTIDAS como funcionaria del Banco de Occidente.

3.- En vista que se desconocía el salario devengado por la demandada y que a los primeros días del mes de Enero del año 2016, NO se sabía si le habían descontado de su salario; el día 14 de Enero de 2016, el abogado MARVIN FERNANDO ALVAREZ HERNANDEZ, solicitó el embargo del inmueble de propiedad de la parte demandada identificado con el Número de Matrícula Inmobiliaria 120- 14155.

4.- Posterior a ello, la parte demandada del proceso, solicitó el desembargo del bien, y debido a que no lo realizaron conforme a derecho, el Juzgado Sexto Civil Municipal de Popayán, el día 25 de Abril de 2016 les negó el levantamiento de la medida.

5.- El Juzgado de conocimiento el día 17 de Agosto de 2016 dictó sentencia en contra de las demandadas del proceso ejecutivo y les ordenó pagar las sumas adeudadas a los demandantes.

6.- Debido a que a las señoras les negaron el levantamiento de la medida, y les tocó pagar la totalidad de la obligación en el mes de Junio del año 2016 interpusieron en contra del abogado MARVIN FERNANDO ALVAREZ HERNANDEZ dos (02) quejas temerarias ante la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca. (Radicado de los Expedientes No. 000-2016-00330-00-A y No. 0002016-00522-00-A).

7.- Las dos (02) denuncias disciplinarias fueron presentadas por escrito y en ellas se plasmaron afirmaciones calumniosas e injuriosas en contra de mi poderdante, aseveraciones que dejaban por el piso su desempeño profesional como abogado; hecho que se observa al revisar la copia de la queja presentada, entre las que se destacan términos injuriosos y calumniosos como, obrar de mala fe y de manera temeraria en un proceso. (se aportan).

8.- Los argumentos fácticos de la queja, se fundaron en el hecho de haber solicitado el embargo del salario y del inmueble de propiedad de una de las demandadas.

9.- Los procesos disciplinarios iniciados en contra de mi poderdante, empezaron su trámite procesal, desde el mes de Junio del año 2016 y tuvieron una duración de CINCO (05) años hasta el día 22 de Junio de 2021. Lapso de tiempo en el cual mi patrocinado debió soportar la preocupación, zozobra e intranquilidad de haber sido llevado a sede disciplinaria sin justificación alguna, convirtiéndose en una carga que no estaba obligado a soportar, la que le genero un daño antijurídico que debe ser reparado.

10.- En los procesos disciplinarios iniciados en contra de mi defendido, el suscrito abogado asumió la defensa técnica de los mismos, lo que conllevo largo tiempo de estudio, preparación y la asistencia a todas las audiencias que requirieron las mismas.

11.- El desgaste de los procesos, sucede cuando el suscrito abogado entre todas las actuaciones realizadas al interior de los mismos, solicitó la acumulación de las Investigaciones Disciplinarias. Se solicitaron pruebas y en el desarrollo del proceso se procedió a interrogar a los testigos e incurrir en todos los pormenores y estudios para una buena defensa ante el proceso disciplinario.

12.- El perjuicio reclamado se resume y demuestra cuando el abogado MARVIN FERNANDO ALVAREZ HERNANDEZ y el suscrito togado concurrimos a todas las audiencias fijadas por el Consejo Seccional de la Judicatura, y cuando no se pudo asistir a las mismas, siempre existió la excusa de por medio para poder llevar a cabo la referida defensa de mi prohijado; aunado a que todo esto siempre implicó preparación de la audiencia y de igual manera dedicar el tiempo necesario para trasladarse al despacho del Magistrado, resaltando que durante los cinco (05) años que duró el proceso (se acumularon luego de una petición) en algunas oportunidades las audiencias fueron suspendidas cuando ya el suscrito y mi poderdante nos encontrábamos presentes en la sede de dicho

despacho judicial, y se habían postergado otro tipo de diligencias de cada uno de los suscritos para atender el llamado el Magistrado.

13.- Por la gestión profesional, el demandante del proceso, abogado MARVIN FERNANDO ALVAREZ HERNANDEZ, debió incurrir en unos gastos como lo fueron el pago de unos Honorarios Profesionales al suscrito, para la defensa de los dos (02) procesos disciplinarios iniciados en su contra, por los cuales canceló la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$6.500.000,00), tal y como consta en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales suscrito el día 22 de Enero de 2018.

14.- Durante los cinco (05) años que duró la investigación disciplinaria mi poderdante y el suscrito nos vimos en la imperiosa obligación de estar pendiente de su trámite, vigilar el trasegar del mismo, responder a los requerimientos del magistrado investigador y demás trámites que como defensor y acusado del mismo conllevaron la inversión de recursos en tiempo, estudio y recursos pecuniarios, siendo prueba de ello el pago de unos honorarios y la comparecencia de los testigos llamados a declarar señores JOSE MARCELIANO VALLEJO ORDOÑEZ y JUAN PABLO BUSTAMANTE SANCHEZ

15.- Como argumentos de la defensa del investigado, se expuso que no se podría INICIAR investigación disciplinaria en contra del abogado MARVIN FERNANDO ALVAREZ HERNANDEZ, y mucho menos sancionarlo, cuando le correspondía al Juez como Director del Proceso, regular los embargos que se solicitan, de conformidad con lo preceptuado en el *Artículo 599 del Código General del Proceso*

16.- De igual manera se expuso al interior de la Investigación Disciplinaria que las quejas estaban actuando de mala fe en contra del abogado; debido a que NO podían alegar exceso de embargo; ya que el Juzgado Sexto Civil Municipal de Popayán, el *"día 25 de Abril de 2016 les había negado el desembargo"*

17.- Otra prueba de la mala fe con la que actuaron las demandadas de este proceso, es cuando al interior del proceso disciplinario, nunca asistieron a las citas del consejo.

18.- El día 22 de Junio del año 2.021 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, decidió proceder a la terminación de la Investigación Disciplinaria de los procesos 2016-330 y 2016-522 acumulado; ordenando el archivo definitivo del expediente.

19.- La providencia dictada el 22 de Junio de 2021, proferida por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, a cargo del Dr. RICHARD NAVARRO MAY no fue apelada por el ministerio publico única autoridad con privilegio para el de alzada, por lo que goza de plena firmeza.

20.- La ley faculta y legitima al actor del proceso, para incoar el inicio de esta acción, al ser afectado por el actuar equivocado de la parte demandada, quien de manera temeraria inicia un proceso disciplinario sin

tener el derecho en su favor, y saberlo desde otrora, debido a la negativa de levantamiento de medidas cautelares por parte del Juzgado Sexto Civil Municipal de Popayán; donde se vislumbró que todo se hizo con el ánimo de provocar una sanción hacia el ejercicio profesional del referido abogado; lo que a las claras se constituye en un abuso de su derecho a denunciar, por la falta de pruebas, mala fe y el propio desinterés que presentaron al interior del referido asunto.

21.- Entre el hecho dañoso realizado por la parte demandada y el daño ocasionado a la parte demandante, existe un nexo de causalidad, ya que fueron las señoras CARMEN HELENA RODRIGUEZ BASTIDAS y GLADIS AMPARO BASTIDAS LOPEZ, las que de manera temeraria iniciaron las acciones de Denuncias (02) disciplinarias en contra de mi poderdante, sin tener fundamento legal; hechos que a la postre llevaron al desgaste judicial y al pago de honorarios al suscrito abogado. Así mismo, no existe eximente de responsabilidad alguno que permita enervar la relación de causalidad en el hecho dañoso, y no se conocen hechos que justifiquen el actuar de las demandadas en este proceso.

PRETENSIONES

DECLARAR que la señora CARMEN HELENA RODRIGUEZ BASTIDAS y GLADIS AMPARO BASTIDAS LOPEZ son responsables por Responsabilidad Civil Extracontractual de todos los Perjuicios Materiales y Morales ocasionados a mi poderdante; señor MARVIN FERNANDO ALVAREZ HERNANDEZ, en razón de la Denuncia Disciplinaria interpuesta ante el Consejo de la Judicatura desde el año 2016 de la cual resultó absuelto el referido señor, el día 22 de Junio de 2021

Síntesis de la contestación de la demanda:

La parte demandada propuso como excepciones de mérito las siguientes:
i.- Las que se derivan de la imposición de la carga probatoria de los perjuicios reclamados; **ii.-** Inexistencia de los elementos propios de la responsabilidad; **iii.-** Concurrencia o compensación de culpas

CONSIDERACIONES

1. Competencia:

Debido a que se trata de un proceso verbal sumario de responsabilidad civil extracontractual donde el supuesto hecho dañoso y el domicilio de las demandadas se ubica en la ciudad de Popayán, es este despacho, de conformidad a los artículos 17 y 28 del C.G.P., es competente para dirimir el presente conflicto.

2. Legitimación en la causa:

La legitimación en la causa por activa la ostenta el señor MARVIN FERNANDO ALVAREZ HERNANDEZ por ser el perjudicado con la actividad desarrollada por las demandadas. En igual sentido, la legitimación en la causa por pasiva recae sobre CARMEN HELENA RODRIGUEZ BASTIDAS y

GLADIS AMPARO BASTIDAS LOPEZ, por ser ellas quienes supuestamente desarrollaron el hecho dañoso.

3. Calificación de la conducta de las partes:

En atención a lo dispuesto en el artículo 280 del C.G.P este Despacho en cumplimiento de su deber de calificar la conducta desplegada por las partes en el presente proceso, resalta que todas las actuaciones fueron desarrolladas por los intervinientes de manera oportuna, sin que se llegare a percibir de manera alguna conductas dilatorias o desleales, razón por la cual, no hay lugar a deducir ningún indicio en contra de la demandante y la demandada.

4. Problema Jurídico:

De acuerdo a lo definido por este despacho, después de dar trámite a la demanda y a las excepciones de fondo interpuestas, el problema jurídico a resolver por el Despacho es el siguiente:

¿Se configuran en el presente caso los elementos de la responsabilidad civil extracontractual por el hecho de haber presentado las demandadas quejas disciplinarias contra el demandante, las cuales posteriormente fueron desestimadas por la autoridad competente?

5. Consideraciones específicas sobre la responsabilidad civil extracontractual derivada de la interposición de queja disciplinaria

La Corte Suprema de Justicia, en la Sentencia SC1066-2021 del 5 de abril de 2021¹ estableció lo siguiente:

"Del abuso del derecho a litigar:

*Toda persona tiene derecho a acceder al sistema de justicia. Así lo prevé la Carta Política de 1991 en su artículo 229. Por ende, activar ese servicio público y esencial no genera per se ninguna responsabilidad ni débito indemnizatorio. **Solo, excepcionalmente, cuando se hace con temeridad, mala fe, negligencia o intención dañina, el afectado puede, ahí sí, buscar la forma de ser desagraviado mediante la condigna reparación de los daños irrogados.***

Empero, como en tal caso no hay vínculo material entre el ofensor y la víctima, la controversia debe resolverse en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual, bajo el sistema de la culpa probada establecido en el artículo 2341 del Código Civil, que, para el caso, es calificada, por lo que el reclamante debe demostrar:

(...) una conducta humana antijurídica, en este caso, el adelantamiento de un proceso o la realización de un acto procesal particular en forma desviada de su finalidad; un factor o criterio de atribución de la responsabilidad, que en la referida hipótesis, como viene de explicarse, solamente puede consistir en la temeridad o mala

¹ Sala de Casación Civil. M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque. Radicación n° 23001-31-03-002-2016-00219-01

fe; un daño o perjuicio, es decir, un detrimento, menoscabo o deterioro, que afecte bienes o intereses lícitos de la víctima, vinculados con su patrimonio, con su esfera espiritual o afectiva, o con los bienes de su personalidad; y, finalmente, una relación o nexo de causalidad entre el comportamiento de aquel a quien se imputa la responsabilidad y el daño sufrido por el afectado (SC, 1º nov. 2013, rad. n.º 1994-26630-01).

La jurisprudencia ha identificado diversas situaciones constitutivas del abuso del derecho a litigar o de las vías legales, entre ellas, interposición de una acción temeraria basada en el albur del proceso y sin consideración al derecho en discusión (CSJ. SC. 30 oct. 1935), CSJ SC 10 may. 1941. G.J. LI, pág. 283 a 291 y CSJ SC, 28 sep. 1953, entre otras); la formulación de una denuncia penal sin fundamento (CSJ SC. 21 nov. 1969 G.J. CXXXII, pág. 156-180); el desistimiento de un proceso inesperadamente para evitar un inminente fallo adverso que diere la victoria a la contraparte (ídem); y la promoción de un compulsivo sin fundamento ni respaldo (CSJ SC, 15 dic. 2009, rad. 2006-00161-01).

...

Lo propio reiteró en CSJ SC, 14 feb. 2005, exp. n.º 12073, donde destacó que «el ejercicio abusivo del derecho a litigar es un fenómeno que puede configurar la responsabilidad civil extracontractual de quien acude a la jurisdicción de manera negligente, temeraria o maliciosa para obtener una tutela jurídica inmerecida» y replicó en CSJ SC3930-2020 donde dijo que «el ejercicio del derecho a litigar es una prerrogativa que, si bien puede generar consecuencias negativas para quien tiene que resistir la pretensión, sólo comporta el débito indemnizatorio cuando a través de ella se busque agravar a la contraparte o se utilice de forma abiertamente imprudente».

En compendio, cuando una persona acude al aparato judicial de mala fe, con negligencia, temeridad o animus nocendi, a reclamar un derecho a sabiendas que no le corresponde, con ello afecta, correlativamente, a quien tiene que resistir la pretensión, lo que ha forjado la teoría del abuso del derecho a litigar.

*En tal evento, el afectado, si aspira a ser desagraviado a través de la condigna indemnización de perjuicios, debe canalizar su reclamo a través de una acción de responsabilidad civil extracontractual y probar los siguientes elementos: **a). La existencia de una conducta antijurídica (dolo, culpa, temeridad o mala fe) del sujeto respecto de quien se dirige la acción;** **b).**- El perjuicio sufrido y, desde luego, **c).**- La relación o nexo de causalidad entre el actuar de aquél a quien se imputa el daño sufrido por éste.*

...

*El tribunal no deformó la sentencia de 27 de febrero de 2015 en la cual la Supersociedades desestimó las súplicas de María Victoria Salleg de Jaller, Ramón, Daniel y Luis Fernando Jaller Salleg contra la Clínica Montería S.A., Enrique y William Salleg Taboada en el juicio de nulidad; lo que aconteció fue que **después de valorarla descartó el actuar temerario, culposo o malicioso que se les endilgó a los accionados porque dicho juzgador se convenció de que esas personas tenían interés en discutir la cesión,** al ser accionistas de la Clínica Montería S.A.*

Al respecto, expresó:

(...) en lo atinente a la prueba documental, advierte la Sala que no está probada la temeridad o mala fe de los accionantes dentro de la demanda de nulidad absoluta que se adelantó ante la SuperSociedades, pues no basta el solo hecho de haber acudido los accionistas en el ejercicio del derecho que reclaman, ya que en razón de su animus societario tenían intereses legítimos en controvertir la validez del contrato de venta de acciones y cosa diferente es que sus pretensiones no prosperaran luego del análisis de las pruebas realizadas en la sentencia que puso fin al proceso.

En el sub lite no se allega ninguna otra prueba distinta al trámite de la acción de nulidad para probar la temeridad o mala fe, siendo carga del recurrente, y debe advertirse, a su vez, que la sola revocatoria de las medidas cautelares que en su momento merecieron la calificación de apariencia de buen derecho no es prueba suficiente, pues, recuérdese que se debe obrar en tales actuaciones de forma maliciosa o desbordada, lo que tampoco se prueba con la mera circunstancia de que con la sentencia que puso fin al proceso se desestimaran las pretensiones de la demanda. Se advierte, también, que en el proceso génesis –acción de nulidad– no fue objeto de debate ni se planteó la nulidad o mala fe por la parte demandada, por lo que era apenas lógico que el sentenciador ningún pronunciamiento realizara al respecto, máxime cuando en el decreto de las medidas cautelares se había conceptuado la apariencia de buen derecho frente a las pretensiones, y si ahora en el presente proceso el demandante alega la existencia de temeridad o mala fe debe probarlo suficientemente, lo cual no hizo.

Y, en coherencia con esa línea argumentativa, agregó:

Comoquiera que en la acción de nulidad absoluta el debate se centró en la interpretación y aplicación de las normas y estatutos relativos al derecho de preferencia en la compra de acciones, cada extremo de la litis tenía, entonces, una expectativa legítima en probar los hechos en que fundaba sus pretensiones o excepciones según el caso y, siendo aplicable la regla de la libertad en materia probatoria y la sana crítica para valoración por parte del Juez, se colige con la sola aportación de pruebas por parte de los demandantes no se desbordaba ese interés legítimo en obtener el éxito de las pretensiones de la demanda ni mucho menos con ello se demuestra su actuar culposos o doloso. En este punto, se advierte sobre el documento de aceptación de la oferta que alega el apelante es falso, que no está probado ni en la demanda de nulidad ni en este proceso de responsabilidad civil la falsedad o la intención dañina, pues la compulsas de copias ordenada en la sentencia obedece a una apreciación del fallador ante la duda sobre la existencia o no de un hecho lícito, mas no que estuviese probado, tampoco ninguna prueba allegó el recurrente sobre el resultado de dicha compulsas. Es así que los reparos concernientes a la valoración de la prueba documental vertida y de la valoración de las decisiones dictadas por la Superintendencia de Sociedades dentro del proceso génesis no tienen vocación de prosperidad.

...

Lo anterior corrobora que la comprensión del fallador no se revela arbitraria ni alejada de toda sindéresis, sobre todo porque lo que el

sistema repele es el abuso de las vías legales, **supuesto que no se configura cuando una persona habilitada para disputar la validez de un negocio jurídico ejerce las acciones provistas para ese específico propósito, con independencia del resultado de esa gestión jurisdiccional.**

...

Al efecto, en CSJ SC 10 may. 1941. G.J. LI, pág 283-291, la Corte precisó:

No siempre que se intenta un pleito y el actor no triunfa, como sucede con frecuencia, puede decirse que hay abuso del derecho, porque si es evidente que el artículo 194 del C. Judicial está condicionado a que el ejercicio de la acción incoada sea serio y recto, también lo es que reemplazando en toda sociedad civilizada el derecho a la fuerza, está atribuido a los Jueces dar a cada uno lo que le corresponde, según las normas legales y las diferencias entre los particulares, se someten a la decisión de la autoridad competente, por cuanto es la diversidad de conceptos, los diferentes aspectos de una cuestión, las diferentes pruebas, las que suscitan la controversia entre los particulares, que no pudiendo resolver éstos hace menester el imperio de la decisión judicial, toda vez que una de las partes no puede erigirse en juzgadora de la contraria.

Ello es así porque si el Estado prohíbe a los coasociados extralimitarse en el ejercicio de sus prerrogativas, es solo cuando desatienden ese postulado superlativo que se les puede responsabilizar por abusar de sus derechos; **no así cuando acuden a pedir tutela judicial porque sienten que una garantía les está siendo conculcada, porque el hecho de que sus pedimentos sean desatendidos no basta para deducir automáticamente su actuar mendaz y malintencionado en perjudicar a quien llamaron a juicio, pues esto último, que es la excepción, debe probarse.**

...

debido a que alegaron que esa transferencia era nula por contradecir el artículo 404 mercantil, tema que no era del todo claro dado que el cedente siguió apareciendo registrado como miembro principal de la junta directiva de la Clínica Montería S.A., después de decretada la toma de posesión e inclusive cuando se hizo la cesión, lo que revela que el alegato que con base en esa situación plantearon los precursores de la nulidad no fue malintencionado, pues hallaba sustento en la información pública que tenían acerca de la composición de los órganos directivos de la intervenida

...

A pesar de lo anterior, el yerro carece de trascendencia porque el juzgador entendió que las conductas alegadas como constitutivas de abuso del derecho fueron desvirtuadas por las demás pruebas y que, por tanto, era imposible establecer los elementos axiológicos de la acción.

Al efecto, expresó:

Sobre el reparo relativo a la inasistencia de la demandada MARÍA VICTORIA SAYEK al interrogatorio de parte, se observa que por ser una litisconsorte facultativa, sobre lo cual no hay discusión en el proceso, tal inasistencia no genera automáticamente que se tengan por confesos los hechos de la demanda ni las preguntas asertivas formuladas en el interrogatorio, por cuanto los efectos procesales que

otorga el artículo 192 del CGP para este evento, es que de resultar la confesión aplicable se tenga como testimonio de un tercero, por lo que en el asunto bien hizo el Juez en valorar conjuntamente las pruebas allegadas para concluir que no estaba probada la intención dañina. **Tampoco es acertado dar por probada dicha temeridad o mala fe en el hipotético caso en que se aceptara la confesión ficta o presunta por la inasistencia**, pues, tratándose de una presunción de orden legal admite prueba en contrario por no ser absoluta y, comoquiera que las demás pruebas vertidas en el proceso no demuestran dicho actuar doloso, el resultado sigue siendo adverso a las pretensiones del recurrente.” (Negritas y subrayas fuera de texto)

Ahora, también es pertinente destacar que el mismo alto tribunal de la jurisdicción ordinaria, aunque en el escenario de la denuncia penal, plasma con absoluta claridad, de forma reiterada y pacífica, los lineamientos sobre el abuso del derecho. Tenemos por ejemplo, que en la sentencia del 25 de mayo de 2005² estableció:

"Sobre estos últimos particulares es menester recordar que en armonía con diversos pronunciamientos de esta misma Sala, "en principio, la formulación de una denuncia por hechos presuntamente delictuosos, **traduce el cumplimiento de un deber 'público y social**, universal y legislativamente aceptado, de notificar al Estado de tales hechos para que promueva, desarrolle y concluya la investigación y proceso penal correspondiente, para establecerlos e imponer a los responsables las sanciones pertinentes (con la reparación de los perjuicios del caso), **razón por la cual su ejercicio se considera responsable y lícito, y no deja de serlo por la abstención de la apertura o conclusión del proceso por el sobreseimiento o absolucón de la persona denunciada**, quien, por consiguiente, carece de derecho a reclamar resarcimiento de los perjuicios sufridos' a menos, claro está, que la persona vinculada en forma arbitraria e injusta a un proceso penal como consecuencia de una noticia criminal o de una denuncia temeraria, **demuestre 'plenamente los elementos de la responsabilidad civil del acto o actos abusivos imputables al denunciante**, los daños ocasionados al denunciado y la relación de causalidad directa entre ellos, so pena, en caso contrario, de quedar el denunciante como arriba se dijo, amparado por la ley y exonerado de toda responsabilidad civil" (sents. de 13 de octubre de 1988 y 23 de junio de 2000).

Tal doctrina, posteriormente la reiteró esta Corporación cuando sostuvo que "**el resultado favorable al denunciado no basta para deducirle responsabilidad al denunciante, sino que es necesario demostrar, además del daño y la relación causal, la intención dañina con que se obró, o la negligencia o imprudencia que se observó**, porque los elementos definitorios de esta responsabilidad se enmarcan dentro del esquema de la teoría de la responsabilidad subjetiva" (sent. 7 de noviembre de 2000, exp. 5476).

Por las prenotadas razones, esto es, por cuanto es ostensible que ni en la demanda incoativa, ni en el escrito en que sustentó su recurso

² Ref. Exp. 1469. M.P. Pedro Octavio Munar Cadena.

de casación, el señor Villero Gámez afirmó siquiera que la denuncia contra él impetrada obedeció a la temeridad de su contraparte, o que los jueces penales, al absolverlo de las imputaciones efectuadas por un dependiente de la Caja, hubieran concluido que -al interponer la noticia criminis- éste obró con indiscutida imprudencia o negligencia, o de mala fe, es que tampoco cabe deducir que el Tribunal incurrió en trascendental error de derecho por no haber dispuesto, oficiosamente, el recaudo adecuado de la copia de las pluricitadas sentencias absolutorias, es decir, su reproducción en la forma ajustada a los comentados artículos 254 y 115 del C. de P. C., puesto que tal proceder oficioso, en la situación descrita, no hubiera reportado utilidad alguna. Dedúcese así, que la actividad probatoria echada de menos por el censor, resultaba inocua". (Negrillas y subrayas fuera de texto)

En el mismo sentido, en la sentencia SC11770-2016 del 26 de agosto de 2016³ adujo:

"En sentencia de casación del 11 de octubre de 1977, a modo de síntesis y recopilación de su entonces ya aquilatada doctrina sobre la materia, dijo la Corporación:

Desde el año de 1935 la Corte viene sosteniendo, uniforme y reiteradamente, la doctrina de que sólo cuando el denunciante de una infracción penal procede con intención de perjudicar al denunciado, o lo hace sin la cautela, cuidado o diligencia con que suelen obrar las personas prudentes, y de tal actuación surge un daño, incurre en la responsabilidad civil consagrada por el artículo 2341 del Código Civil, por razón de la cual está obligado a reparar los perjuicios causados al procesado.

*Lo cual significa que, en torno a la cuestión de la responsabilidad civil que corresponda por el denuncia a la autoridad de la comisión de ilícitos penales, **la jurisprudencia colombiana ha rechazado los criterios absolutistas**; no releva de dicha responsabilidad a quien, en ausencia de las precauciones que como hombre prudente y diligente ha debido tomar, para proteger su propio interés cumple con ese mandato deber que le impone la ley; **tampoco la consagra por el solo hecho de que a la denuncia no la acompañe en últimas el buen éxito, porque ello no significa automáticamente que haya incurrido en culpa.***

En dicha providencia transcribe esta Corte fallos del 24 de agosto de 1938 (G. J., T. XLVII, pág. 57), del 7 de marzo de 1944 (G. J., Tomo LVII, 76), de 30 de abril de 1962 (G. J. T. XCVIII, 375). Y en fecha más reciente, haciendo acopio de precedentes suyos, volvió a decir (SC 099-2006 del 2 de agosto de 2006, rad.50001-31-03-001-1999-00054-01):

Sobre este particular ha reiterado la Corte que "... en cuanto concierne al correcto tratamiento del fenómeno jurídico del abuso del derecho, únicamente cuando el denunciante de una infracción penal actúa entonces con intención de perjudicar al denunciado, o lo hace sin el cuidado con el que normal y ordinariamente obran las personas prudentes, y de tal proceder se genera un daño, aquél incurre en la

³ Rad.: 76001-31-03-005-2006-00394-01. M.P. Margarita Cabello Blanco

responsabilidad civil prevista en el artículo 2341 del Código Civil, quedando en la obligación de resarcir el perjuicio causado al sindicado.

Igualmente ha sostenido esta corporación que 'no porque una investigación o proceso penal originado en una denuncia particular termine con auto de sobreseimiento definitivo, tiene por solo ello que reputarse como establecida la culpabilidad del denunciante, puesto que el sobreseimiento ha podido producirse en virtud de incidencias o factores sin repercusión sobre las circunstancias ante las cuales el agente estuvo colocado y que permitirían configurar de su parte una conducta juiciosa, arreglada a la mente de la ley' (G.J. T. XCVIII, 375). Dicho en otros términos, para deducir responsabilidad civil frente a quien ha denunciado a otro como autor de la comisión de un hecho punible, no basta la declaratoria de improcedibilidad de la acción penal o la terminación del proceso -resolución inhibitoria, cesación de procedimiento, preclusión de investigación, sentencia absolutoria-, sino que **es necesario acreditar plenamente el ánimo de perjudicar o que por parte del denunciante existió un error de conducta al formular la denuncia**, en virtud a que en este tipo de controversias es punto de partida la presunción de buena fe que ampara las actuaciones de los particulares en todas las gestiones que adelantan ante las autoridades públicas (art. 83 C.P.)" (Sent. Cas. Civ., de 17 de septiembre de 1998, Exp. 5096).

4. La extensa transcripción jurisprudencial, hecha con la deliberada finalidad de reiterar la sólida posición que en esta materia ha mantenido la Sala de Casación Civil, muestra sin asomo de duda que **la configuración de una responsabilidad civil por el hecho de formular una denuncia penal entraña una exigente prueba, el animus nocendi o el error de conducta en que consiste la culpa, desde luego que entender causado un perjuicio tan solo por denuncia penal que termina sin condena sería tanto como cercenar a los ciudadanos el derecho fundamental de libre acceso a la administración de justicia por el justo temor de que el denunciado le demande por perjuicios**. Y privaría además al Estado de la esperada colaboración de aquellos en el mantenimiento de la armonía y paz sociales, denunciando los hechos que estiman delictivos.

Precisamente por los perjuicios potenciales y de todo orden que el acto de denuncia puede desencadenar, la Ley se ha cuidado de rodearlo de algunas exigencias mínimas, constatables en las diversas legislaciones que a lo largo del tiempo la han regulado (1): a) Debe hacerse bajo juramento; b) verbalmente o por escrito, pero en todo caso se deja constancia del día y hora de su presentación; c) debe estar motivada, pues ha de contener una relación detallada de los hechos que conozca el denunciante, y d) este debe manifestar, si le consta, que los mismos hechos ya han sido puestos en conocimiento de otro funcionario". (Negritas y subrayas fuera de texto)

Si analizamos la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, podemos afirmar con vehemencia que para la procedencia de la declaratoria de responsabilidad civil extracontractual generada por una queja disciplinaria o una denuncia penal, resulta indispensable que el accionante demuestre de forma fehaciente y contundente que el quejoso

o denunciante actuó con temeridad, mala fe, negligencia o intención dañina al momento de ejercitar su derecho de acción, pues no basta con el hecho de que la queja o la denuncia, después de haberse agotado el trámite judicial correspondiente, no salga favorable a los intereses del promotor.

Ahora bien, desde la perspectiva que nos define la jurisprudencia de la Corte, debe el Despacho descender al análisis del acervo probatorio para así establecer si efectivamente el señor demandante logró demostrar dentro del plenario la mala fé y/o la intención dañina con la que supuestamente procedieron las demandadas al incoar las quejas disciplinarias ante la Sala correspondiente del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca.

Las siguientes fueron las pruebas documentales aportadas por el actor:

- Copia de la queja temeraria radicada ante el consejo Seccional de la Judicatura, con sus anexos.
- Copia de algunas de las citaciones y actuaciones realizadas por los procesos disciplinarios al señor MARVIN FERNANDO ALVAREZ HERNANDEZ, y actuaciones del suscrito abogado defensor al interior del proceso disciplinario.
- Derecho de Petición elevado ante la Secretaría de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, para dar cuenta de la ejecutoria de la sentencia y de la investigación disciplinaria (02) en contra de mi poderdante, de fechas 13 de Julio de 2021 y 02 de Agosto del mismo año.
- Contrato de prestación de servicios profesionales suscrito el 22 de febrero de 2018 entre el demandante y el abogado FREDY ALEXANDER RUIZ VILLANO, con el fin de que el último mencionado representará al actor de este proceso en las actuaciones disciplinarias que se adelantaron en su contra por la queja de las demandadas.
- Videos de las audiencias de pruebas y calificación provisional realizadas por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca los días 25 de julio de 2018, 7 de mayo de 2019, 17 de julio de 2019, 9 de abril de 2021 y 22 de junio de 2021, dentro de los trámites disciplinarios acumulados con los radicados 2016-330 y 2016-522.

A juicio de este despacho, la valoración conjunta de estas pruebas documentales solo permiten establecer con claridad la existencia de un proceso disciplinario iniciado por las hoy demandadas contra el señor MARVIN FERNANDO ALVAREZ, a raíz de lo que ellas consideraron una actuación indebida por la solicitud y práctica de medidas cautelares en el escenario de un proceso ejecutivo que contra ellas se adelantara en el otrora denominado Juzgado Sexto Civil Municipal de Popayán, actualmente denominado Juzgado Cuarto de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la misma ciudad. El proceso disciplinario finiquitó en favor del hoy demandante debido a que la Sala Disciplinaria que

conoció el asunto definió que no se podían formular cargos contra el señor Marvin Álvarez debido a que el juez natural del proceso ejecutivo, dentro del cual se surtieron las conductas supuestamente configurativas de falta disciplinaria, las consideró ajustadas a derecho.

En este instante de las consideraciones es pertinente destacar que el artículo 69 de la ley 1123 de 2007, más comúnmente conocida como el código disciplinario del abogado, establece lo siguiente:

"Quejas falsas o temerarias. Las informaciones y quejas falsas o temerarias, referidas a hechos disciplinariamente irrelevantes, de imposible ocurrencia o que sean presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa, darán lugar a inhibirse de iniciar actuación alguna.

Advertida la falsedad o temeridad de la queja, el investigador podrá imponer una multa hasta de 180 salarios mínimos legales diarios vigentes. Las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, en los casos que se advierta la temeridad de la queja, podrán imponer sanción de multa, previa audiencia del quejoso, por medio de resolución motivada contra la cual procede únicamente el recurso de reposición que puede ser interpuesto dentro de los dos días siguientes a su notificación personal o por estado". (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Indudablemente, este parámetro normativo que acabamos de enunciar, nos traza un muy fuerte indicio de que las señoras demandadas **no actuaron de forma temeraria o negligente** al momento de interponer las quejas disciplinarias contra el hoy demandante; muestra de ello es que, la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, ostentando toda la posibilidad de hacerlo, no realizó ninguna actuación procesal tendiente a sancionar la actividad falsa o temeraria que según el señor Marvin Álvarez desarrollaron las señoras Carmen Helena Rodríguez y Gladis Amparo Bastidas al momento de denunciarlo disciplinariamente. En el mismo sentido, teniendo la facultad de inhibirse o de iniciar actuación alguna por percibir rasgos de temeridad en la queja disciplinaria incoada, decidió iniciar el trámite necesario para calificar provisionalmente la conducta del sujeto disciplinable, utilizando para tal fin las sesiones de audiencia acaecidas el 25 de julio de 2018, el 7 de mayo y 17 de julio de 2019, el 9 de abril y 22 de junio de 2021. Para expresarlo de una forma más simple, considera el despacho que si el juez disciplinario no ejercitó ninguna de sus potestades para castigar la actuación temeraria de las quejosas, fue justamente porque no la encontró configurada.

Bajo esta misma línea argumentativa, también debe el suscrito operador judicial ser enfático en que no comparte la posición del demandante referente a que la ausencia de las hoy demandadas en las audiencias que se adelantaron ante el juez disciplinario son prueba de un actuar temerario. Llegamos a esta conclusión porque como puede verificarse, el artículo 65 y el párrafo del artículo 104 del Código Disciplinario del abogado expresamente señalan:

Artículo 65. Intervinientes: *Podrán intervenir en la actuación disciplinaria el investigado, su defensor y el defensor suplente cuando sea necesario; el Ministerio Público podrá hacerlo en cumplimiento de sus funciones constitucionales.*

Artículo 104 Parágrafo: *"Será obligatoria la presencia del disciplinado o su defensor a las audiencias de que tratan los artículos siguientes. Si tales intervinientes no comparecieren o se ausentasen sin causa justificada, se suspenderá la audiencia, por el término de tres días para que se justifique la causa. Vencido este término el juez evaluará la causa y si persistiere la incomparecencia procederá de inmediato a designar un defensor de oficio con quien se proseguirá la actuación".* (resaltado fuera de texto)

La lectura de estas normas permiten establecer claramente que en el proceso disciplinario la comparecencia del quejoso(a) no es requerida por la ley, y por lo tanto mucho menos sancionable su ausencia, razón por la cual resulta absurdo pensar, como lo pretende el demandante, en derivar una consecuencia tan funesta, como es la presunción de temeridad, por el simple hecho de que las hoy demandadas no hubieren comparecido a las audiencias que adelantó la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura.

Pasando ahora a la valoración de la prueba testimonial, tenemos que comparecieron los señores **JOSÉ MARCELIANO VALLEJO ORDOÑEZ** y **JUAN PABLO BUSTAMANTE SANCHEZ**. El señor VALLEJO ORDOÑEZ, abogado de profesión, representó los intereses del padre y el hermano del hoy demandante en una diligencia de secuestro realizada el 26 de agosto de 2016 dentro proceso ejecutivo singular adelantado ante el otrora denominado Juzgado Sexto Civil Municipal de Popayán, contra las señoras que en este proceso fungen como demandadas; por su parte, el señor Bustamante Sánchez manifiesta ser trabajador del señor Marvin Fernando Álvarez. De estas dos declaraciones, a juicio del despacho, acudiendo a la más generosa de las interpretaciones, solo puede extraerse algún indicio del padecimiento que sufrió el demandante por verse obligado a atender el proceso disciplinario que se inició en su contra en virtud de la queja que interpusieron las hoy demandadas; pero de ninguna manera, y hay que ser enfático en ello, indican algo relacionado con la eventual temeridad o intención dañosa con la que supuestamente actuaron las accionadas al presentar la queja. Expresándolo de una forma simplificada, si atendemos los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, tendríamos que estos testimonios resultan totalmente inocuos para el reconocimiento de las pretensiones del demandado, habida cuenta que, eventualmente servirían para probar el perjuicio sufrido, pero no el hecho dañoso imputable a la parte pasiva de este proceso.

Idéntica consideración merece el contrato de prestación de servicios profesionales suscrito el 22 de febrero de 2018 entre el demandante y el abogado FREDY ALEXANDER RUIZ VILLANO, pues reiteramos, absolutamente de nada sirve demostrar el padecimiento de un perjuicio si no se acredita el hecho dañoso del accionado.

Del interrogatorio realizado a las señoras CARMEN HELENA RODRIGUEZ BASTIDAS y GLADIS AMPARO BASTIDAS LOPEZ, podemos destacar que en ellos tampoco se avizoró ningún indicio de temeridad o mala fe suficiente para configurar los elementos para endilgarles la responsabilidad civil extracontractual deprecada por el actor. En dichas declaraciones las mencionadas señoras de manera coincidente afirman que su queja disciplinaria fue motivada no por el deseo de retaliación, sino por la angustia, el desespero y la incertidumbre que les produjo la posibilidad de perder la vivienda de una de ellas como consecuencia de las medidas cautelares que dentro proceso ejecutivo ya referenciado en líneas anteriores de esta providencia, había logrado perfeccionar el Señor MARVIN FERNANDO ALVAREZ HERNANDEZ. Ahora bien, no encuentra este despacho ningún elemento legal o jurisprudencial que permita al menos presumir que el actuar bajo este tipo de presión pueda asimilarse a un acto temerario o de mala fe.

En igual sentido se puede afirmar que las pruebas documentales aportadas por las demandadas en su acto de contestación, no generan indicio alguno de temeridad o mala fe por parte de las accionadas al momento de presentar la queja disciplinaria en contra del demandante.

Corolario de todo lo anterior, debe este Juzgado dar por establecido que la parte demandante fracasó rotundamente en su intento de demostrar que las señoras CARMEN HELENA RODRIGUEZ BASTIDAS y GLADIS AMPARO BASTIDAS LOPEZ son civilmente responsables por haber incoado ante la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca las quejas que fueron tramitadas bajo los radicados ya enunciados en esta providencia, razón por la cual se deberán negar las pretensiones, ordenar el levantamiento de las medidas cautelares que se hubieran practicado y dar por terminado el presente proceso verbal sumario.

Condena en costas y agencias en derecho:

De conformidad al artículo 365 numeral 5º del C.G.P, en vista de que se han negado la totalidad de las pretensiones, se impondrá condena en costas al señor MARVIN FERNANDO ALVAREZ HERNANDEZ en favor de CARMEN HELENA RODRIGUEZ BASTIDAS y GLADIS AMPARO BASTIDAS LOPEZ, las cuales se liquidarán por secretaría.

Por otra parte, con base en el artículo 5º del Acuerdo N° PSAA16-10554 de 2016, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y en vista de que el demandante pretendió la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$6.500.000) por concepto de daño emergente y la suma de TRECE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/Cte. (\$13.627.890) por concepto de perjuicios extrapatrimoniales, el señor MARVIN FERNANDO ALVAREZ HERNANDEZ deberá pagar a cada una de las demandadas, por concepto de **Agencias en Derecho**, la suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$2.500.000)**.

Asunto: VERBAL SUMARIO – RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Radicado: 2021-00568-00
Demandante: MARVIN FERNANDO ALVAREZ HERNANDEZ
Demandado: CARMEN HELENA RODRIGUEZ BASTIDAS Y OTRA

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO SEGUNDO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCA MÚLTIPLE DE POPAYÁN (Cauca), "Administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley",

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda

SEGUNDO: ORDENAR la terminación del presente proceso declarativo verbal sumario.

TERCERO: ORDENAR el levantamiento de la inscripción de la demanda. Ofíciase para tal fin a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de esta ciudad.

CUARTO: CONDENAR en costas al señor MARVIN FERNANDO ALVAREZ HERNANDEZ en favor de CARMEN HELENA RODRIGUEZ BASTIDAS y GLADIS AMPARO BASTIDAS LOPEZ, las cuales se liquidarán por secretaría. En lo que refiere a las Agencias en Derecho, el señor MARVIN FERNANDO ALVAREZ HERNANDEZ deberá pagar a cada una de las demandadas la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$2.500.000).

NOTIFÍQUESE⁴ Y CÚMPLASE

⁴ SE NOTIFICA POR ESTADO Nº 057 DEL 01 DE JUNIO DE 2022

Firmado Por:

**Victor Fabio De La Torre Vargas
Juez
Juzgado Pequeñas Causas
Juzgado 002 Pequeñas Causas Y Competencias Múltiples
Popayan - Cauca**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **6eeb93c8fa71f7ec052c7b6e259fe858386bc79fd85acf2736af324284bef787**

Documento generado en 31/05/2022 12:12:18 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**